

Los negocios en la Federación Rusa

Enfoque de derechos humanos

Amnistía Internacional

Los negocios en la Federación Rusa

Enfoque de derechos humanos

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional pide a todas las organizaciones del sector privado, incluidas empresas e instituciones económicas en general, que respeten y promuevan los derechos humanos. Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a la actividad empresarial extranjera en la Federación Rusa.

Amnistía Internacional es un movimiento de activistas voluntarios de todo el mundo, que trabaja en favor de los derechos humanos. Es independiente de todo gobierno, ideología política, y credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional realiza labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación. En este contexto, Amnistía Internacional:

- trabaja para obtener la libertad de todos los presos de conciencia, es decir, de las personas que han sido privadas de su libertad a causa de sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, o en razón de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento y otras circunstancias, y que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso;
- trabaja para lograr que se juzgue con prontitud e imparcialidad a todos los presos políticos;
- se opone sin reservas a la pena de muerte y a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- trabaja para acabar con los homicidios políticos y las «desapariciones»
- insta a los gobiernos a que no cometan homicidios ilegítimos en conflictos armados;
- insta a los grupos políticos armados a que pongan fin a abusos como la reclusión de presos de conciencia, la toma de rehenes, la tortura y los homicidios ilegítimos;
- se opone a los abusos cometidos por agentes no estatales en el caso de que los Estados hayan incumplido su deber de garantizar una protección efectiva;
- trabaja para lograr que se lleve ante la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos;
- presta ayuda a los solicitantes de asilo que corren el riesgo de ser devueltos a un país en el que pudieran estar expuestos a sufrir abusos graves contra sus derechos humanos;
- se opone a ciertos abusos graves contra los derechos económicos, sociales y culturales.

Amnistía Internacional procura también:

- cooperar con otras organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales regionales;
- conseguir que se garantice el control sobre las relaciones internacionales militares, de seguridad y policiales para impedir los abusos contra los derechos humanos;
- organizar programas de educación y sensibilización en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional es un movimiento democrático y autónomo, con más de un millón de miembros y simpatizantes en más de 140 países y territorios. Se financia en gran medida con las aportaciones de sus miembros de todo el mundo y con donaciones públicas.

Índice

LOS NEGOCIOS EN LA FEDERACIÓN RUSA: ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	4
LA CRUDA REALIDAD.....	5
QUÉ HAY QUE HACER.....	6
NORMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE CONDUCTA EMPRESARIAL	7
¿LOS DERECHOS HUMANOS INCUMBEN A LAS EMPRESAS?	9
LA ECONOMÍA RUSA EN LA ACTUALIDAD	10
RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES	11
EL PETRÓLEO RUSO: LA FUERZA MOTORA.....	11
EL CLIMA EMPRESARIAL	13
DESCONFIANZA GENERALIZADA.....	14
NORMAS NO ESCRITAS	15
LA CORRUPCIÓN: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS	17
CORRUPCIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	18
LA CORRUPCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA	20
INICIATIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.....	20
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA FEDERACIÓN RUSA	22
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	22
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE MOTIVACIÓN ÉTNICA	23
LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN	24
EL CONFLICTO DE CHECHENIA.....	24
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS?	25
REDACTEN SU PROPIO CÓDIGO DE CONDUCTA	25
EVITEN PRÁCTICAS CORRUPTAS.....	26
GARANTICEN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	26
NO PARTICIPE EN EL COMERCIO DE DIAMANTES DE ZONAS DE CONFLICTO	26
DIFUNDIR LA INFORMACIÓN	27
EL PACTO MUNDIAL DE LA ONU: UN INSTRUMENTO ÚTIL	27
EJERZAN SU INFLUENCIA EN EL FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	27
APÉNDICE 1. PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS PARA EMPRESAS	28

Los negocios en la Federación Rusa: Enfoque de derechos humanos

En todo el mundo hay empresas interesadas en actuar en la Federación Rusa. Amnistía Internacional considera que dichas empresas no sólo deben cerciorarse de no participar en abusos contra los derechos humanos, sino que pueden desempeñar además un papel importante en el fomento del respeto de dichos derechos.

[CUADRO]

Amnistía Internacional pide a las empresas que incluyan los derechos humanos en sus estrategias cuando evalúen los riesgos de actuar en la Federación Rusa y que tengan en cuenta las repercusiones de sus actividades sobre los derechos humanos.

[FIN DEL CUADRO]

El atractivo de la Federación Rusa para los negocios se debe a muchas razones, entre las que se encuentran las abundantes reservas de petróleo y gas del país, así como la enorme riqueza mineral de Siberia. La mano de obra, que goza de una elevada instrucción, se contrata por un precio menor, en comparación, a la de muchos otros países. El descenso del valor del rublo repercute en una oferta de productos y servicios relativamente barata. Bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, la Federación Rusa se ha ganado en occidente la condición de aliado y, tras unos años turbulentos, el país ha recuperado la estabilidad política y el crecimiento económico.

Con la creación de la Federación Rusa tras el desmoronamiento de la Unión Soviética (URSS) en 1991, apareció una nueva forma de gobierno elegido por el voto del pueblo. La economía se abrió al libre mercado y se introdujo una nueva Constitución, respaldada por numerosas reformas legislativas. Sin embargo, la liberalización económica no estuvo acompañada de la creación de mecanismos reguladores efectivos. Mientras ciertas personas obtenían cuantiosas ganancias, otras muchas tuvieron que hacer frente a una situación creciente de penuria e inseguridad. En la esfera política, se ha producido un marcado aumento de las libertades de expresión y de circulación. Por otra parte, también se han intensificado los movimientos nacionalistas y separatistas. En lo que respecta a los derechos humanos, aunque se han erradicado muchas de las violaciones flagrantes que caracterizaron durante tanto tiempo la antigua Unión Soviética, aún persisten abusos generalizados a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley y de las fuerzas de seguridad de Rusia, a menudo en un clima de impunidad.

[CUADRO]

Amnistía Internacional no adopta postura alguna respecto a la actividad empresarial extranjera en la Federación Rusa. No respalda a las empresas que operan en el país ni sugiere su retirada. La decisión de invertir o comercializar en la Federación Rusa pertenece únicamente a las empresas.

[FIN DEL CUADRO]

Pese al potencial económico y a las reformas políticas de la Federación Rusa, el país sigue ofreciendo dificultades para los negocios.¹ Para una economía de su calibre, la inversión extranjera directa es baja.²

¹ Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, la Federación Rusa se situaba en el 71^{er} lugar de los 102 países sondeados en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2002 (en el que la posición más elevada corresponde al país con menor nivel de corrupción registrado). El índice CPI anual sensibiliza a la opinión pública sobre el problema de la corrupción, se tiene en cuenta en los programas de los organismos de ayuda más importantes y afecta a las decisiones de inversión en el extranjero de las empresas multinacionales.

Las empresas se quejan sistemáticamente del deficiente respeto de las leyes por parte del gobierno central y local, de la falta de transparencia en la toma de decisiones y la adopción de políticas, de la inseguridad del entorno empresarial, de la influencia del crimen organizado y de la presencia constante de la corrupción.

A menudo, los inversores de todo el mundo optan por no tener en cuenta los historiales de derechos humanos de los países donde actúan. Uno de los pretextos esgrimidos es que los intereses y necesidades empresariales no tienen relación con los derechos humanos. Ese argumento no es en absoluto aplicable. El historial de derechos humanos de la Federación Rusa tiene una repercusión directa en los intereses empresariales, y las empresas pueden influir en el clima de respeto de los derechos humanos con sus políticas y prácticas.

[CUADRO]

Amnistía Internacional no señala a la Federación Rusa en particular. Los principios de buena conducta empresarial son universales e incumben a todos los países. Amnistía Internacional ya elaboró material en el pasado para las empresas que actuaban en China y Arabia Saudí.³ El objetivo de este documento es el de sensibilizar a los directivos empresariales sobre algunos de los problemas que afectan a los derechos humanos en la Federación Rusa y sobre cómo sus empresas pueden contribuir a promover dichos derechos.

[FIN DEL CUADRO]

La cruda realidad

*El único negocio auténtico [en Rusia] es el de la política, y así será siempre.*⁴

Mikhail Khodorkovsky, presidente de Yukos Oil, una de las mayores empresas rusas

La Federación Rusa afronta numerosos problemas económicos y sociales. La rápida reestructuración de la economía ha propiciado diferencias de ingresos cada vez más amplias, hasta el punto de que, de una población total de aproximadamente 144 millones de personas, más de 80 millones viven en la pobreza. La brecha entre regiones ricas y pobres también se está ensanchando. Por ejemplo, el moscovita medio gana 17 veces más que los habitantes de Ingushetia. En 1997, Moscú aportó el 46 por ciento de las rentas públicas del país. El índice de muertes por VIH/SIDA y abuso de alcohol se ha incrementado,⁵ e un problema agravado por la intensificación de la pobreza y el deterioro de las prestaciones sociales de salud. La población disminuye a marchas forzadas.⁶ Los dirigentes de la nación están preocupados

El Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión, junto con el Foro Económico Mundial, situaron a la Federación Rusa en el último puesto en lo que se refiere a competitividad general de su lista de 47 países desarrollados y economías emergentes del 2000, y en el 45º puesto en la lista de 49 países del 2001.

² Según el Banco Mundial, la afluencia neta acumulada en Rusia de inversión extranjera directa entre 1992 y 1999 fue de 71 dólares per cápita, frente a los 511 dólares de Polonia, los 1.493 de la República Checa y los 1.581 de Hungría.

³ *China: Los derechos humanos interesan a todos* (Índice AI: ASA 17/18/96/s), Amnistía Internacional, 1996; *Saudi Arabia: Open for Business* (Índice AI: MDE 23/082/2000), Amnistía Internacional, 2000.

⁴ Véase Andrei Piontkowsky, «What Was Wrong: Asian flu or Russian Pneumonia?» (¿Qué salió mal: gripe asiática o neumonía rusa?), Jamestown Foundation Conference on Russia, 1999. <<ftp://www.jamestown.org/paper-piontkowsky.rtf>>

⁵ Véase «Alcohol and Mortality in Russia: the 1980s and 1990» (Alcohol y mortalidad en Rusia: los años 80 y 90), de Aleksandr Nemtsov, en *Demoskop Weekly*, núm. 19/20 (mayo de 2001).

⁶ Véase «Genotsid rossiiskogo naroda» (Genocidio de la nación rusa), *Kommersant-daily*, 13 de mayo de 1999. Según este artículo, hubo 1.700.000 nacimientos en la Federación Rusa en 1991; esta cifra descendió a 1.200.000 en 1997. En cambio, se registraron 1.600.000 muertes en 1991 y 2 millones en 1997. Entre 1990 y 1997, hubo un descenso del 35 por ciento del consumo de carne en Rusia, del 41 por ciento del consumo de leche y del 31 por ciento del consumo de huevos, mientras que el consumo de patatas aumentó un 19 por ciento. La incidencia de la

asimismo por la «fuga de cerebros», la emigración de ingenieros y científicos a Estados Unidos, Israel y países europeos.

Las violaciones de derechos humanos en la Federación Rusa se cometen de forma generalizada, mientras que las víctimas (especialmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad, como mujeres, niños y miembros de minorías étnicas) tienen pocas posibilidades de llevar ante la justicia a los autores de abusos. Las personas retenidas bajo custodia policial son objeto con frecuencia de torturas o malos tratos. Las condiciones imperantes en los centros de reclusión preventiva del país, masificados y plagados de enfermedades, suelen ser atroces. Las libertades de expresión y de asociación se han visto amenazadas y ha habido persecuciones por motivos políticos. Los objetores de conciencia al servicio militar se exponen al reclutamiento forzoso y a la prisión. Otros motivos de preocupación importantes son la discriminación y la violencia por motivos de etnia. Según la información de la que dispone Amnistía Internacional, durante el conflicto en la República Chechena, las tropas federales rusas fueron responsables de homicidios, torturas y violaciones de civiles sin temor al castigo. Las fuerzas chechenas son autoras a su vez de abusos.

Los negocios emprendidos en la Federación Rusa no se encuentran al margen del contexto de los derechos humanos. Algunos empleados de empresas han sido detenidos y reclusos en condiciones atroces, o alistados en las fuerzas armadas. Los empleados de empresas y sus familias son susceptibles de sufrir las mismas indignidades cotidianas que el resto de la población rusa.

[CUADRO]

Amnistía Internacional pide a las empresas que desempeñan su actividad en la Federación Rusa (al igual que en todos los demás países) que garanticen que sus prácticas se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Esto significa que deben respetar los derechos humanos de sus empleados y las personas a cargo de éstos, así como de la población de las comunidades donde actúan. También deben hacer que el respeto de los derechos humanos sea una parte integrante de su trato con otras compañías, socios, colaboradores, filiales, proveedores y autoridades gubernamentales.

[FIN DEL CUADRO]

La corrupción y la delincuencia imperan en un clima que ha causado perjuicios económicos a muchas compañías, nacionales y extranjeras. Como consecuencia de la generalización de la corrupción y del descontrol, algunas compañías han visto cómo se apropiaban de sus bienes otras manos, han sido víctimas de fraude o han dejado de recuperar el dinero que les debían sociedades que desaparecieron sin dejar rastro.

La falta de respeto de las leyes afecta a las empresas al igual que a los individuos. Las empresas requieren a menudo un acceso libre a la información para competir de forma eficaz, y tal libertad se encuentra restringida. La sensación en algunas empresas es la de que no queda otro remedio que tratar con sociedades implicadas en abusos contra los derechos humanos o adoptar prácticas corruptas como pagar sobornos o contratar servicios de seguridad cuyos métodos distan en ocasiones de ser mínimamente aceptables.

Qué hay que hacer

Las empresas, como las personas, necesitan poder confiar en que las instituciones y prácticas del Estado protejan sus intereses fundamentales. Algunas compañías extranjeras han afirmado que puede lograrse un entorno empresarial seguro en Rusia mediante un código claro de gestión corporativa, un incremento de los salarios de los funcionarios, un código impositivo fiscal transparente, una nueva legislación sobre quiebras y una reducción de las facultades de los funcionarios del Estado. No obstante, ¿bastaría con estas medidas?

tuberculosis ascendió del 35,8 por mil al 73,9, la de la sífilis, del 13,4 al 277,3, y la de los trastornos psíquicos, del 274,3 al 348,2.

[CUADRO]

Las empresas no deben hacer uso del trabajo forzado ni del trabajo infantil que constituye explotación. Deben hacer que sus propias políticas y prácticas, incluidas la contratación y las políticas de empleo, estén exentas de toda discriminación por motivos de sexo o de origen étnico o racial.

[FIN DEL CUADRO]

Amnistía Internacional considera que los problemas de las compañías están íntimamente relacionados con el funcionamiento de la sociedad en la Federación Rusa y que, a menos que se adopten cambios fundamentales que fomenten el respeto de los derechos humanos y de las leyes, el entorno empresarial no mejorará sustancialmente. El Estado de derecho debe fundamentarse en las normas de derechos humanos, cuyo fin es el de proteger a las personas de tratos injustos y abusos por parte de los Estados.

Las empresas no sólo pueden beneficiarse de la estabilidad de una sociedad basada en el respeto de los derechos fundamentales de la persona, sino que deben ser conscientes de su importante responsabilidad sobre las cuestiones de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos insta a que «tanto los individuos como las instituciones» protejan y promuevan los derechos humanos, lo que, según el criterio de Amnistía Internacional, incluye a las empresas e instituciones económicas. Las empresas deben respetar los intereses y los derechos humanos (como el derecho a la seguridad y la salud) de sus empleados y las personas a cargo de éstos, así como de sus socios, colaboradores y subcontratistas, y la población de las comunidades donde actúan.

[CUADRO]

Las empresas deben investigar los historiales de derechos humanos de las empresas encargadas de la seguridad de sus instalaciones, material y personal, y abstenerse de contratar a aquellas que tengan un historial de abusos contra los derechos humanos.

Por encima de todo, las empresas deben tomar medidas para evitar toda complicidad en violaciones de derechos humanos.

[FIN DEL CUADRO]

Las empresas extranjeras pueden influir decisivamente desempeñando un papel activo en la protección de los derechos de sus empleados y las personas a cargo de éstos. Mediante el respeto y la defensa de los derechos humanos, las empresas pueden contribuir a la edificación de una sociedad más justa y segura (tanto como para la población como para la empresa) en la Federación Rusa.

Conducta empresarial y normas de derechos humanos

Las normas internacionales de derechos humanos son universales. Se refieren a todos los seres humanos de todo el mundo y enuncian los derechos humanos que toda empresa debe respetar y tener en cuenta al desempeñar su actividad en cualquier parte del mundo, incluida la Federación Rusa. Las normas de derechos humanos y los principios que rigen las buenas prácticas están contenidos en los tratados, declaraciones e instrumentos adoptados por la comunidad internacional y en los códigos facultativos. Éstas son algunas de las normas más importantes:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos.⁷ Este conjunto de principios universalmente reconocidos es el pilar sobre el que se asienta el sistema de derechos humanos de la ONU. Identifica los derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales)

⁷ <www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm>

fundamentales para el bienestar de todos. En ella, se proclama que los derechos humanos son responsabilidad internacional y que son universales e indivisibles.

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.⁸ Este tratado amplía los derechos civiles y políticos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Estados Partes se comprometen legalmente a respetar los derechos consagrados en el tratado y a garantizar que todas las personas de su territorio o bajo su jurisdicción puedan ejercerlos sin discriminación alguna. La Federación Rusa ha ratificado este tratado.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.⁹ Este tratado amplía los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los Estados Partes se comprometen legalmente a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la cooperación internacional y utilizando al máximo los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena aplicación de los derechos reconocidos en el tratado, sin discriminación alguna. La Federación Rusa ha ratificado este tratado.
- La Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el órgano de las Naciones Unidas que promueve los derechos de los trabajadores. Esta declaración reafirma el compromiso de todos los miembros de la OIT, lo que incluye al gobierno, los sindicatos y las organizaciones patronales de la Federación Rusa, de cumplir cuatro principios básicos, a saber: la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva (reconocidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT), la abolición del trabajo forzoso (Convenios 29 y 105), la igualdad de oportunidades y de trato en el trabajo (Convenios 100 y 111) y la eliminación del trabajo infantil (Convenios 138 y 182). Todos los países miembros de la OIT tienen la obligación de respetar los principios fundamentales enumerados en la Declaración.
- Los ocho Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.¹⁰ Estos tratados internacionales, legalmente vinculantes (Convenios 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182, véase *supra*), conforman un marco de protección para los trabajadores y disponen un entorno aceptable tanto para los empleadores como para los trabajadores. La Federación Rusa ha ratificado todos los Convenios Fundamentales excepto el 182, relativo a las peores formas de trabajo infantil.
- El proyecto de normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos humanos.¹¹ Estas normas, elaboradas en la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Ginebra, se fundamentan en tratados y normas internacionales y se aplicarán a todas las empresas.
- El Pacto Mundial de la ONU.¹² Se trata de una iniciativa propuesta por el secretario general de la ONU. Las empresas firman los principios que desean de los nueve existentes, que abarcan los derechos humanos, las normas de trabajo y el medio ambiente. En el apartado de derechos humanos, se insta a los gobiernos a respaldar y respetar la protección de los principios internacionales de derechos humanos dentro de su ámbito de influencia y a garantizar que las empresas bajo su jurisdicción no son cómplices de abusos contra los derechos humanos.
- La Iniciativa Mundial de Presentación de Informes.¹³ Se trata de una iniciativa voluntaria destinada a asesorar a las empresas respecto a la elaboración y presentación de informes sobre los efectos sociales, medioambientales y laborales de sus actividades de forma homologada y mediante la consulta con las partes interesadas.

⁸ <www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm>

⁹ <www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ceschr_sp.htm>

¹⁰ <webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/index.cfm?lang=ES>

¹¹ Elaborados en la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; E/CN.4/Sub.2/2002/13.

<www.business-humanrights.org/Draft-UN-Human-Rights-Responsibilities-of-Business-Aug-2002.htm>

¹² <www.unu.org/sc/globalcompact.pdf>

¹³ <www.globalreporting.org>

- El Convenio de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).¹⁴ Este tratado, legalmente vinculante, tiene como objetivo la eliminación de la corrupción en el comercio y la inversión internacionales. La Federación Rusa no lo ha ratificado (véase apéndice 2).
- Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,¹⁵ que abarcan cuestiones medioambientales, sociales, laborales y de derechos humanos.
- Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.¹⁶ Esta iniciativa fue lanzada por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, a los que se agregaron los de los Países Bajos y Noruega. Las empresas de los sectores petrolero y minero se han agrupado voluntariamente para acordar una serie de principios que rijan el empleo de fuerzas de seguridad en sus zonas de actividad.
- El Proceso de Kimberley en relación con los diamantes de zonas en conflicto.¹⁷ Este proceso internacional de negociación engloba a empresas y organizaciones no gubernamentales, así como a países que participan en la extracción, el procesamiento o la comercialización de diamantes, y su objetivo es eliminar el comercio de diamantes procedentes de las zonas de conflicto.
- El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.¹⁸ Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1979, este código establece normas para la conducta de las personas que ejercen funciones de policía, especialmente las funciones de detención o custodia. El objetivo de estas normas es el de garantizar que el personal encargado de hacer cumplir la ley respeta y protege los derechos humanos. Aunque este código de la ONU no posee, estrictamente hablando, la fuerza de ley de un tratado, el hecho de haber sido negociado por gobiernos y adoptado por la ONU le dota de poder persuasivo.
- Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.¹⁹ Este conjunto de principios dispone las circunstancias estrictamente limitadas en las que el personal de seguridad puede emplear la fuerza o las armas de fuego en el desempeño de sus tareas, busca limitar el empleo de la fuerza al mínimo necesario.
- Los Principios de Derechos Humanos para Empresas de Amnistía Internacional.²⁰ Amnistía Internacional ha elaborado un conjunto de principios de derechos humanos, basados en normas internacionales, para ayudar a las empresas a determinar su papel frente a situaciones de violaciones de derechos humanos o frente a la posibilidad de tales violaciones. Véase apéndice 1.

¿Los derechos humanos incumben a las empresas?

Algunas normas internacionales son tratados firmados y ratificados por gobiernos.²¹ Esto quiere decir que los Estados se comprometen legalmente a cumplirlos. Ciertas empresas alegan que, puesto que son los Estados y no las empresas quienes firman los tratados, el contenido de éstos no les incumbe. Nada más lejos de la realidad. Los gobiernos que ratifican los tratados de derechos humanos deben tomar medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos en esos instrumentos. Una de las formas en las que los gobiernos aplican los tratados internacionales es sirviéndose de la legislación

¹⁴ <www.imf.org/external/np/gov/2001/eng/091801.htm>. Pueden consultar las ratificaciones en el apéndice 1 o en <www.oecd.org/pdf/M00017000/M00017037.pdf>

¹⁵ <www.oecd.org/pdf/M00024000/M00024422.pdf>

¹⁶ <www.state.gov/g/drl/rls/2931.htm>

¹⁷ <www.kimberleyprocess.com>

¹⁸ <www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp42_sp.htm>

¹⁹ <www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp43_sp.htm>

²⁰ <www.edai.org/centro/tematico/sectores/A7000198.ZIP>

²¹ Los Estados también pueden participar en estos tratados por adhesión o por sucesión.

nacional. Dado que las empresas se rigen por ella, también se rigen indirectamente por lo que disponen los tratados de derechos humanos ratificados por los gobiernos.

Asimismo, cuando un Estado contrata los servicios de una empresa para que desempeñe una función oficial, el Estado se compromete a velar porque la actuación de dicha empresa se ajuste a las obligaciones contraídas por él en virtud del derecho internacional.

Además de los tratados, legalmente vinculantes, existen otros instrumentos sin rango de tratado ni fuerza de ley, pero que establecen las normas mínimas de buenas prácticas a las que toda empresa debe adherirse.

Toda empresa tiene la responsabilidad directa de respetar los derechos humanos en el desempeño de sus actividades. Sus empleados y todas las personas con quienes colabore gozan de derechos tales como el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a no sufrir esclavitud, el derecho a la libertad de asociación, que incluye el derecho a sindicarse, y el derecho a gozar de condiciones laborales justas. Las empresas deben tomar medidas que garanticen especialmente que sus medidas de seguridad no dan lugar a abusos contra los derechos humanos.

Las empresas que empleen presos deben tomar todas las precauciones necesarias para velar por los derechos humanos de los presos contratados. El trabajo en prisión supone una importante fuente de ingresos para muchos presos, pero puede dar lugar a abusos. Formalmente, los presos rusos tienen derecho a una remuneración proporcionada al trabajo que desempeñan. El artículo 105 del Código de Ejecución Penal dispone que los presos tienen derecho a salarios acordes con la legislación, y que éstos no pueden ser inferiores al salario mínimo. No obstante, los salarios de los reclusos están sujetos a deducciones destinadas a fondos de pensiones, subsidio infantil, alimentación y otras «prestaciones varias». En la fábrica textil Vladimir, las mujeres que alcanzan la cuota de trabajo especificada ganaban 500 rublos (alrededor de 20 dólares estadounidenses) al mes en 1999 y el 2000, y de ellos podían conservar una quinta parte aproximadamente. La remuneración de los presos empleados en otras fábricas era mucho menor.

Amnistía Internacional considera que la comunidad empresarial tiene además la responsabilidad general de ejercer su influencia para promover el respeto de los derechos humanos.

Un buen punto de partida para las empresas consiste en establecer un código de conducta que reconozca explícitamente las normas internacionales de derechos humanos y, a continuación, elaborar políticas de actuación y de gestión que permitan la aplicación del código en todos los niveles incluidos las filiales, los socios, los subcontratistas y los colaboradores. Las empresas deben comprobar además los avances por medio del diálogo frecuente con organizaciones no gubernamentales (ONG) y la consulta con las comunidades locales. Asimismo, deben hacer pública una evaluación del cumplimiento de su código de conducta verificada por agentes independientes.

La economía rusa en la actualidad

Los indicadores macroeconómicos señalan mejoras en la Federación Rusa. El aumento de los precios de los productos básicos y la devaluación del rublo en 1998, que hizo más competitivo el precio de los artículos nacionales, han fomentado el aumento de las reservas en moneda extranjera y, como consecuencia, el rublo se ha fortalecido. Una importante reforma fiscal del 2001 redujo el impuesto sobre la renta personal desde una tasa progresiva de hasta el 30 por ciento a una tasa fija del 13 por ciento, con el objetivo de aumentar la recaudación de impuestos e incentivar el consumo. El crecimiento económico ha sido relativamente firme en los dos últimos años y, aunque la inflación todavía oscilaba entre el 15 y el 20 por ciento en el 2002, era marcadamente inferior al 84 por ciento de 1998. Se prevé que la deuda total descienda de un 130 por ciento a un 40 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el 2004.²²

²² Entrevistas con economistas de Londres y Nueva York.

En el 2002, la Federación Rusa pudo hacer gala de un presupuesto equilibrado, un creciente superávit de la balanza comercial, una mejora de las reservas en divisas y una economía en expansión. Sin embargo, en términos de Europa occidental, conservaba aún un nivel de prosperidad bajo.²³

En junio del 2002, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos declararon que la Federación Rusa es una economía de mercado, lo que facilitaría la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Federación Rusa solicitó su ingreso en la OMC en 1995, pero su afiliación comportaría llevar a cabo decisiones económicas difíciles, cuyas consecuencias se dejarían sentir en los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, el gobierno tendría que aceptar conceder un trato de igualdad a las sociedades extranjeras y nacionales, así como privatizar ciertas empresas estatales, incluidos los servicios públicos, lo que reduciría el acceso de los más pobres a los servicios básicos.

Recuperación de las inversiones

Durante el pasado año o en los dos últimos años, la inversión extranjera ha ido en aumento²⁴ y se ha empezado a recuperar el dinero ruso que había salido al extranjero.²⁵

Éstos son algunos ejemplos de recientes inversiones:

- Ford Motor Company (Estados Unidos) ha puesto en marcha cerca de San Petersburgo la primera fábrica automovilística de propiedad totalmente extranjera.
- General Motors (Estados Unidos) ha realizado una inversión de 300 millones de dólares en la empresa rusa AvtoVAZ.
- Metso Oyj (Finlandia), el mayor fabricante mundial de maquinaria de procesamiento mineral, suministrará material de procesamiento de diamantes a Siberia.
- El fabricante estadounidense de aviones Boeing anuncia la participación de ingenieros rusos en su proyecto de fabricación del avión Sonic Cruiser, que volará más alto y más rápido que los actuales aviones de pasajeros.
- Motorola (Estados Unidos) ha construido instalaciones de software en San Petersburgo.
- Intel (Estados Unidos) ha establecido laboratorios de investigación en Sarov (Nizhny Novgorod) y proyecta expandirse a San Petersburgo y Novosibirsk.

Reforzando la integración rusa en la economía mundial, las empresas rusas han empezado a invertir en el extranjero. El año pasado, Yukos Oil adquirió el 22 por ciento del grupo anglo-noruego de ingeniería Kvaerner por 30 millones de dólares y acordó la compra de dos de sus unidades por 100 millones de dólares. Lukoil invirtió 71 millones de dólares el pasado año en la compra de 1.300 gasolineras de Getty en Estados Unidos.

El petróleo ruso: la fuerza motora

Las reservas de petróleo de la Federación Rusa ocupan el octavo lugar del mundo en magnitud y las reservas de carbón el segundo. Asimismo, el país posee las mayores reservas de gas natural del mundo.²⁶ Es el mayor exportador de gas natural, uno de los mayores exportadores de petróleo y el tercer mayor consumidor de energía del mundo.

²³ Por ejemplo, y según *The Economist*, para alcanzar el nivel de prosperidad de Portugal, uno de los miembros más pobres de la UE, Rusia tendría que crecer alrededor del 8 por ciento al año durante 15 años. Portugal ha sido mencionado por dignatarios rusos como ejemplo de país cuyo nivel de vida pretenden lograr en un futuro próximo. «Putin's Choice. A Survey of Russia» (La opción de Putin. Estudio sobre Rusia), *The Economist*, 19 de julio de 2001.

²⁴ En una cita memorable, *The Economist (ibid)* publicó: «Los mismos negociadores de inversiones que habían dicho que preferirían comer residuos nucleares que prestar dinero a Rusia ofrecen ahora acciones y bonos a especuladores olvidadizos».

²⁵ La afluencia reciente de dinero procede en gran parte de Chipre, el paraíso fiscal preferido por los empresarios rusos.

²⁶ Valoración del sector; Cambridge Energy Research Associates.

Dado que la energía constituye dos quintas partes de la exportación rusa y más del 10 por ciento del PIB real del país,²⁷ la economía rusa es extremadamente sensible a las fluctuaciones mundiales del precio de este sector. El crecimiento económico en la Federación Rusa se sustentó en el repentino aumento del precio del petróleo de 1999 y el 2000 y se resintió del posterior descenso de precios. El crecimiento del que se benefició el país hasta el año 2000 ayudó a restituir parte de su deuda externa.

Tras los atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, el precio del petróleo cayó bruscamente y la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP)²⁸ restringió la producción para apuntalar los precios. Pese a que Rusia prometió a la OPEP frenar su producción de petróleo, ésta aumentó durante los primeros meses del 2002. En parte, esta actuación se debió a la voluntad de ayudar a Estados Unidos y a sus aliados a mitigar las presiones recesivas e inflacionistas que siguieron a los ataques del 11 de septiembre,²⁹ pero el coste de esta medida de cooperación fue alto: cada dólar de menos en el precio del crudo comporta para la Federación Rusa un descenso de 2.000 millones de dólares en los ingresos por exportación y de 1.000 millones de dólares en los ingresos federales.³⁰

Las reservas de petróleo demostradas de la Federación Rusa se calculan en 48.600 millones de barriles. No obstante, el equipo está quedándose anticuado y tardan menos en agotarse las reservas que en encontrarse nuevos yacimientos por explotar. Los expertos consideran que la inversión extranjera no es suficiente y que el gobierno debería implantar un impuesto de sociedades transparente y un régimen de producción compartida.³¹

Empresas privadas como Yukos y Lukoil han entablado negociaciones con colaboradores potenciales. Un proyecto conjunto une a la sociedad estadounidense Conoco con Lukoil para construir una flota de petroleros rompehielos que transportarán petróleo por las aguas árticas desde las vastas reservas de la región noroccidental de Timan Pechora. Yukos proyecta construir un oleoducto por la región de los Balcanes hasta el puerto croata de Omisalj, en el mar Adriático.³²

Agip, BP, British Gas, ChevronTexaco, Statoil, Conoco, ExxonMobil, Neste Oy, Norsk Hydro, Marathon, McDermott, Mitsubishi, Mitsui, Royal Dutch/Shell y TotalFinaElf son algunas de las empresas del sector petrolero que mantienen tratos con la Federación Rusa. Según las sociedades moscovitas de inversiones, el petróleo acapara cerca del 50 por ciento de las inversiones industriales de 22.000 millones de dólares estimadas en el 2002.³³

Una zona de intensa prospección petrolera se halla inmediatamente al sur de la Federación Rusa. En 1993, la petrolera estadounidense Chevron (ahora ChevronTexaco) compró el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán. Al cabo de ocho años, y tras una inversión de 4.000 millones de dólares, un consorcio dirigido por ChevronTexaco ha puesto en marcha un oleoducto de 1.580 kilómetros que une Tengiz con Novorossisk, en el territorio de Krasnodar, en la costa del sur de Rusia del mar Negro. BP prepara un ambicioso proyecto en la región del Caspio y ExxonMobil tiene intereses en Tengiz y Azerbaiyán.

Entre los actuales proyectos de transporte de gas y petróleo se cuentan el sistema de oleoductos del Báltico y un oleoducto a China. El gasoducto Blue Stream está destinado a abastecer a Turquía de gas natural. La Federación Rusa y Ucrania han resuelto un desacuerdo sobre la construcción de un oleoducto que apartará de Ucrania el paso de petróleo. Un gasoducto unirá a Yamal con Europa

²⁷ Fuente: Departamento de Energía de Estados Unidos.

²⁸ La OPEP se formó en 1960 para proteger los precios del petróleo. Controla el 61 por ciento del mercado de exportación mundial. Un descenso de la producción de petróleo a principios de 1999 triplicó los precios hasta llegar a 35 dólares el barril. Para disipar el temor a la inflación, la OPEP aumentó la producción y trató de instaurar un sistema de banda de precios.

²⁹ El precio del barril ha fluctuado de los 34 dólares de mediados del 2001 a los 16 dólares de tiempos recientes. El margen de precios preferido por la OPEP es de entre 22 y 28 dólares el barril.

³⁰ *Business Week*, noviembre del 2001.

³¹ Departamento de Energía de Estados Unidos; Cambridge Energy Research Associates; entrevistas con empresas líderes del sector petrolero.

³² *US News and World Report*, 11 de febrero de 2002, p. 48.

³³ *Business Week*, *ibid.*

Occidental a través de Bielorrusia. La mayor compañía de gas de Rusia, Gazprom,³⁴ se ha unido a Shell y ExxonMobil en un proyecto de construcción de un gasoducto hasta China que asciende a 20.000 millones de dólares.

Estos conductos poseen un enorme valor estratégico. El mar Caspio, que contiene una cantidad estimada de 110.000 millones de barriles, está rodeado por tierra, dentro de los territorios de la Federación Rusa, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán. Su cuantiosa producción de petróleo sólo puede transportarse en petroleros si anteriormente se ha canalizado hasta el mar Negro, el Mediterráneo o el golfo Pérsico.

Estados Unidos respalda la construcción de un oleoducto de 1.750 kilómetros que transportará 1 millón de barriles de petróleo al día desde Bakú (Azerbaiyán) hasta el puerto mediterráneo de Ceyhan (Turquía), pasando por Georgia. El oleoducto evitaría por completo el territorio iraní, pero pasaría cerca de la frontera entre Azerbaiyán y Armenia. Más allá de las dificultades geográficas y técnicas, expertos del sector petrolero³⁵ reconocen que este oleoducto atravesaría territorios disputados en una región donde se registran abundantes abusos contra los derechos humanos. A mediados del 2001, lanchas cañoneras y un caza iraníes expulsaron un barco de prospección de BP de una zona del mar Caspio disputada por Irán y Azerbaiyán. Según se ha informado, BP ha dejado de explorar esa zona desde el incidente.

El interés de Rusia en la región del Caspio es tan estratégico como económico. Los expertos han observado que la Federación Rusa desea mantener su influencia sobre sus vecinos inmediatos. La Federación Rusa ha acordado la construcción de un reactor nuclear de 800 millones de dólares en Irán y ha firmado recientemente con Irak un acuerdo comercial de cinco años por valor de 40.000 millones de dólares.

Los ingentes recursos petroleros y minerales de Rusia deberían reportar enormes beneficios a la población del país. Sin embargo, situaciones vividas en África, Asia y otras partes del mundo revelan claramente que las empresas del sector extractivo suelen entrar en disputa con las poblaciones indígenas. Por otro lado, cuando las empresas realizan prospecciones petroleras en zonas de conflicto, se convierten en ocasiones en el blanco de grupos de oposición armada. Asimismo, en los casos en los que han recurrido a servicios de seguridad privados o estatales para proteger a sus empleados y sus bienes, han llegado en ocasiones a estar implicadas en abusos contra los derechos humanos.

El clima empresarial

La Federación Rusa ha sufrido un importante declive económico desde la desintegración de la URSS en 1991. En la última década, su producto nacional bruto se redujo en casi la mitad y su producción industrial en cerca del 60 por ciento. Ha habido una enorme fuga de capital, cuyo alcance se ha estimado en entre 150.000 millones de dólares³⁶ y 350.000 millones de dólares.³⁷

Los intentos de implantar una economía de mercado en Rusia realizados desde 1989 se han visto entorpecidos por enfrentamientos entre el poder legislativo y el ejecutivo, así como por la falta de transparencia y de normas reguladoras de la economía. La repentina retirada del control sobre los precios dio lugar a una hiperinflación, con consecuencias desastrosas para los bolsillos de millones de personas. Los medios productivos del país cayeron en manos de especuladores, en lugar de emprendedores, y el ciudadano de a pie perdió una vez más sus ahorros invirtiendo en planes financieros incontrolados. El sector financiero se vino abajo. Los pilares que sustentaban la economía

³⁴ Gazprom, con una plantilla de 38.000 trabajadores, posee casi un tercio de las reservas mundiales de gas natural, produce cerca del 94 por ciento del gas natural en Rusia y controla la red nacional de 145.000 kilómetros de gasoductos y 43 estaciones de compresión. Es la empresa rusa con mayores ganancias de divisa extranjera y tributa una cuarta parte de las rentas públicas del gobierno federal.

³⁵ Entrevistas con representantes del sector.

³⁶ Estimación de la firma de corretaje moscovita Troika Dialog.

³⁷ Estimación del Ministerio del Interior ruso.

quedaron en manos de hombres de negocios³⁸ que sacaron partido de turbios sistemas de créditos por acciones³⁹ para comprar propiedades estatales a precios muy por debajo de su valor real.⁴⁰

En 1998, a pesar de un paquete de 22.600 millones de dólares del FMI destinado a proteger el rublo, las tasas de interés de las letras del tesoro rusas, conocidas como GKO, se dispararon al 130 por ciento. A continuación, la Federación Rusa incumplió los pagos de su deuda interna y sus obligaciones financieras internacionales. Se anunció una moratoria de 90 días sobre la devolución de la deuda externa y se suspendieron los pagos de las GKO. El rublo se vino abajo junto con el sistema bancario, y muchas empresas fueron a la quiebra. La delincuencia aumentó, tanto en la calle como en el mundo empresarial, lo que propició el afloramiento de fuerzas de seguridad privadas, controladas a veces por ex funcionarios del KGB (el servicio secreto de la desaparecida Unión Soviética).

Desde 1998 se observa un cierto grado de estabilidad política y económica, si bien la economía sigue dependiendo en gran parte de la exportación de productos básicos: petróleo, gas natural, metales o madera, por lo que es vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales. La economía ha crecido y el gobierno está introduciendo una serie de reformas estructurales, como la creación de un código para la gestión corporativa y una nueva legislación sobre quiebras, con el objetivo de establecer un entorno empresarial más previsible.

Desconfianza generalizada

Pese a que hay indicios de aumento de confianza en la economía rusa, la inversión extranjera directa en la Federación Rusa sigue siendo relativamente baja. En el año 2000, la inversión extranjera directa en Estados Unidos fue de 316.000 millones de dólares, y de 39.000 millones en China, mientras que en la Federación Rusa no pasó de los 2.700 millones. Como ha manifestado el Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera del Banco Mundial: «Existe demasiada incertidumbre, ya que la interpretación y la aplicación de las leyes (desde el registro de una nueva empresa hasta la adquisición de tierras o el pago de los impuestos) cambian rápidamente y dependen de qué funcionario público se encargue de la interpretación o de la aplicación. El grado de corrupción es excesivo y empaña todos los niveles: desde funcionarios del escalafón más bajo del fisco o de aduanas hasta altos cargos públicos que exigen “participar” en las empresas cuya rentabilidad se prevé elevada».

Las empresas que actúan en la Federación Rusa reciben a menudo visitas sin anunciar de inspectores procedentes de diversos departamentos gubernamentales: salud, incendios, trabajo o impuestos, por ejemplo. Con frecuencia son empresas rivales quienes los envían con el objetivo de mantener ocupados a sus competidores con trámites burocráticos. Ciertas empresas evitan el pago de impuestos gracias a la complicidad de inspectores de Hacienda, lo que priva al Estado de ingresos que podrían utilizarse para potenciar los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo.

³⁸ Véase *The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia*. (Los oligarcas: riqueza y poder en la nueva Rusia) David E. Hoffman, Public Affairs, Nueva York, 2002.

³⁹ Véase Matt Bivens y Jonas Bernstein, «The Russia You Never Met» (La Rusia que no sueles encontrarte), en *Demokratizatsiya*, vol. 6, núm. 4, octubre de 1998. Los autores describen cómo una empresa, propiedad del Estado, pasa a manos del banco que concede un crédito cuando el gobierno, como en muchos otros casos, no puede devolver dicho crédito.

Así, en 1995, Oneximbank se apropió del 38 por ciento de Norilsk Nickel, el gigante productor de metales no ferrosos (cuyas ganancias procedentes de la exportación se estimaban en ese momento en 2.000 millones al año), a cambio de un crédito de 170 millones de dólares al gobierno. En agosto de 1997, este mismo banco pagó 250 millones más para conservar la participación. Tras deducir la restitución del préstamo, el gobierno no había recibido más que 80 millones de dólares por su sustanciosa participación en la fábrica, que produce el 90 por ciento del níquel, el 90 por ciento del cobalto y todo el platino del país.

De modo similar, el banco Menatep adquirió el 78 por ciento de Yukos, la segunda empresa petrolera de Rusia, con una oferta de 309,1 millones de dólares, 9 millones por encima de la oferta mínima. Gracias a la adquisición, obtuvo el control del dos por ciento de las reservas mundiales de petróleo conocidas. Menatep organizó la subasta y rechazó una puja formulada, según el procedimiento establecido, por el consorcio integrado por Alfa Bank, Inkombank y Rossiisky Kredit.

⁴⁰ Véase el estudio de Svetlana Glinkina *Berichte des Bundesinstituts der Wissenschaftlichen und Internationalen Studien* (Componentes delictivos de la economía rusa), Koln Institut für Ost Europa, no. 29, 1997.

Algunas empresas rusas engañan a los inversores. Otras postergan la presentación de sus cuentas o carecen de contabilidad alguna. Otras emiten acciones con descuentos sustanciales destinados a beneficiar a funcionarios que poseen vínculos con la directiva de la empresa. Otras, finalmente, desvían beneficios a sociedades ficticias emplazadas en paraísos fiscales, lo que menoscaba los derechos de los accionistas minoritarios. Sociedades extranjeras de auditoría han examinado las cuentas de algunas de estas empresas, y un inversor extranjero ha demandado a una importante sociedad de auditoría por tolerar este tipo de abusos.

La desconfianza hacia el Estado sigue siendo elevada. Una encuesta de 1999 realizada por el Centro de Estudio de la Opinión Pública Rusa (VTsIOM) examinó áreas clave de interacción del gobierno con el público: el pago oportuno de pagas, salarios y subsidios, la protección social para desempleados, personas sin hogar y necesitados, la lucha contra el crimen organizado y el mantenimiento de la ley y el orden. El estudio reveló que los rusos desconfían de su gobierno por un margen de casi nueve contra uno.⁴¹ En el mismo estudio, el 74 por ciento de los encuestados señaló la corrupción en los tribunales y el sistema judicial como el principal problema que afecta al poder judicial; el 84 por ciento citó la corrupción policial como el principal problema que afecta a la policía y el 68 por ciento consideró que la corrupción en el gobierno federal era el principal problema que afecta a las relaciones con el gobierno.

Pese a las reformas emprendidas por el gobierno de Putin, muchas instituciones rusas sacan provecho de la ambigüedad, según señalan directivos empresariales. Los límites entre la autoridad regional y la federal sigue siendo difusos, así como los que separan las funciones públicas de las actividades privadas.

A la vista de los altos índices de delincuencia y la desconfianza generalizada hacia la policía, muchas empresas han adoptado por su cuenta las funciones de protección de sus operaciones o han recurrido a servicios de seguridad privados. El riesgo de abusos contra los derechos humanos es elevado: muchos de estos servicios de seguridad desconocen los principios internacionales que permiten una conducta aceptable;⁴² algunos pertenecen a organizaciones delictivas, como las que se relacionan con lo que los medios de comunicación rusos denominan mafia.⁴³ En el marco de unas disputas recientes sobre la propiedad, se celebró una reunión de accionistas minoritarios acompañados de empleados de seguridad fuertemente armados, y ha habido informes sobre un enfrentamiento armado en una fábrica de papel entre milicias privadas y guardas armados y los trabajadores.⁴⁴

[CUADRO]

Amnistía Internacional reconoce que en ciertos países y en determinadas situaciones las empresas necesitan emplear servicios de seguridad para proteger a sus empleados y sus bienes materiales. Amnistía Internacional insta a las empresas a que velen porque sus métodos (y los de los servicios que contraten) actúen conforme con el respeto de los derechos humanos.

[FIN DEL CUADRO]

Normas no escritas

La imperfección de nuestras leyes está compensada por su incumplimiento.

Las leyes en Rusia son como farolas. Siempre puedes sortearlas.

⁴¹ Del análisis de opinión USIA, M-27-99, de 11 de febrero de 1999. La encuesta fue llevada a cabo por el Centro de Estudio de la Opinión Pública de Rusia (VTsIOM).

⁴² Véase, por ejemplo, el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

⁴³ Véase Federico Varese, *The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy* (La mafia rusa: protección privada en una nueva economía de mercado), Oxford University Press, 2001.

⁴⁴ Véase Sabrina Tavernise, «Handful of Corporate Raiders Transform Russia's Economy» (Un puñado de tiburones transforma la economía rusa). *The New York Times*, 13 de agosto de 2002.

El marco legal que rige la conducta empresarial en la Federación Rusa permite la aparición de normas no escritas, arbitrarias y que cambian con frecuencia. «La incoherencia de las normas formales obliga a casi todos los rusos, quieran o no, a infringirlas. La economía funciona de tal manera que siempre te pueden achacar algo: cualquiera puede caer en una encerrona o ser condenado por alguna infracción. Dado que los delitos son tan recurrentes, las sanciones son selectivas y responden a criterios informales y extrajudiciales. Estas normas no escritas surgen para compensar las deficiencias de la legislación y conforman asimismo la base de privilegios selectivos. Todo esto, a su vez, empeora la falta de transparencia de las reglas del juego en Rusia.»⁴⁵ Las disputas suelen resolverse informalmente, por medio de sobornos, contactos personales o el uso de la fuerza, pero no de los tribunales.⁴⁶

Una consecuencia de la arbitrariedad del sistema judicial es la necesidad de que las empresas se busquen *krysha* (protección) para desempeñar hasta las funciones empresariales más rutinarias. Dada la convivencia de las economías delictiva y legal, la protección puede requerirse para la seguridad física, el mantenimiento de la propiedad, la reclamación de deudas, la asistencia en las aduanas, el asesoramiento empresarial y jurídico o los privilegios bancarios. Las empresas recurren a intermediarios y a servicios de seguridad privados que sepan desenvolverse en los complejos sistemas financieros y jurídicos. Estos servicios combinan la especialidad profesional en los códigos formales, como las leyes en materia de impuestos, las licencias, la contabilidad, la banca y la insolvencia, con los servicios informales, como la reclamación de deudas y la obtención de información secreta mediante prácticas de vigilancia. A menudo se recurre también a la mano dura. Algunas de las empresas de seguridad privadas están dirigidas por ex funcionarios del KGB, que pueden acceder a información susceptible de comprometer a empresas rivales.

[CUADRO]

Amnistía Internacional pide a las empresas que investiguen los historiales de los servicios encargados de la seguridad para asegurarse de que no han cometido abusos contra los derechos humanos en el pasado. Las empresas deben establecer acuerdos por escrito con los servicios de seguridad que definan claramente las funciones y responsabilidades de éstos y que garanticen el respeto por los derechos humanos en sus métodos, políticas y prácticas. Las empresas deben insistir en que los empleados de seguridad conozcan bien los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y cumplan el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Las empresas y los servicios de seguridad que éstos contraten no deben violar los derechos humanos en ningún caso, en particular mediante el uso desproporcionado de la fuerza.

[FIN DEL CUADRO]

El Ministerio de Interior (MVD) estimó en 1996 que existían 8.000 bandas criminales activas en la antigua Unión Soviética. Indicó que el 40 por ciento de las empresas privadas, el 60 de las empresas estatales y más de la mitad de los bancos del país estaban bajo el control de sistemas delictivos organizados.

Miembros del sector privado han comunicado a Amnistía Internacional que muchas empresas están obligadas a pagar dinero de protección a bandas delictivas organizadas para poder actuar, y que a menudo no les queda más remedio que confiar en la ayuda de funcionarios concretos en lugar de recurrir a la ley. Tales actos fomentan la corrupción y, ante la escasez de restricciones institucionales y jurídicas

⁴⁵ Alena V. Ledenava, autora de *Russia's Economy of Favors* (La economía de favores de Rusia), Cambridge University Press, 1998. Véase *How Russia Really Works* (Cómo funciona Rusia verdaderamente), de Alena Ledenava, publicado en abril de 2001 por el Centro para la Reforma Europea.

⁴⁶ Peter Solomon afirma en «The Limits of Legal Order in Post-Soviet Russia» (Los límites del orden jurídico en la Rusia postsoviética), *Post-Soviet Affairs*, núm 2, 1995, p. 89: «En el legado dejado por el poder ruso a los Estados que les sucedieron no se incluía el orden jurídico. [...] No existía una jerarquía de normas jurídicas, aplicable y abierta al escrutinio. [...] Los tribunales dependían de la buena disposición de los políticos.»

que los impidan, muchos funcionarios se comportan como si gozasen de un margen ilimitado de *kormlenie*, término de argot para referirse al abuso de las funciones públicas para obtener un lucro personal.

[CUADRO]

Las empresas dedicadas al sector extractivo deben respetar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

[FIN DEL CUADRO]

Las empresas también deben prestar atención al papel que ejercen en la comunidad local. Las empresas rusas ofrecen a sus empleados muchas prestaciones, como alojamiento, educación y atención médica, que constituyen cerca del 35 por ciento del coste de la contratación. Ciertas empresas dotan a la comunidad donde operan de instalaciones, como alcantarillado, hospitales o infraestructura. Las sociedades extranjeras que absorban empresas rusas deben tener en cuenta estos aspectos.

La corrupción: un problema de derechos humanos

«La corrupción es la carcoma que corroe todo intento de ayuda. Destruye el desarrollo, ahuyenta a los auténticos inversores extranjeros, pervierte comunidades. Además, afecta al rendimiento empresarial y aumenta los riesgos del accionista», asegura un alto directivo de una empresa petrolera.⁴⁷ Otro representante de una importante petrolera afirma: «El soborno y la corrupción conducen a una sociedad en la que las decisiones económicas y políticas se distorsionan. Frenan el progreso social, obstaculizan el desarrollo económico e inflan los precios de los productos y servicios. Una sociedad corrupta es una sociedad desigual e injusta».⁴⁸

La corrupción se practica en muchos ámbitos distintos. En el ámbito nacional e internacional, las decisiones y políticas de los altos cargos públicos se ven a veces influenciadas a veces por sobornos y privilegios. En el ámbito local, la población más pobre es incapaz en ocasiones de acceder a artículos y servicios públicos porque están reservados a quienes se pueden permitir el pago de sobornos. Entre uno y otro ámbito hay una zona gris que alberga prácticas que pueden ser más o menos corruptas, como pagos a intermediarios, comisiones, incentivos, recompensas u otras prestaciones.

Amnistía Internacional apela tanto a los gobiernos como a las empresas para que actúen de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Algunas prácticas corruptas provocan directamente abusos, mientras que los efectos de la corrupción suelen dañar la situación de los derechos fundamentales en un país.

Uno de los pilares del Estado de derecho es el trato de igualdad ante la ley. Las prácticas corruptas fomentan la arbitrariedad, puesto que actúan de forma que una parte, sea un particular, una empresa o un funcionario, saca provecho en detrimento de otra. De este modo, los privilegios de unos se convierten en las carencias de otros. Asimismo, la corrupción socava las garantías de acceso equitativo a servicios públicos básicos como la educación, la salud, el cumplimiento de la ley y la justicia.

La corrupción también deteriora la rendición de cuentas. Toda persona que ocupa un cargo, tanto en la esfera pública como en la privada, en el gobierno o en la empresa, deben rendir cuentas ante quienes le han confiado cometidos específicos en su empleo público, puesto ejecutivo o función como agente encargado de hacer cumplir la ley. La corrupción malogra los mecanismos de rendición de cuentas y propicia situaciones políticas, sociales y económicas execrables.

⁴⁷ Richard Newton, vicepresidente del grupo BP, citado en *The Governance of Bribery and Corruption: A Survey of Current Practice* (El gobierno del soborno y la corrupción: estudio de prácticas actuales), de Friends Ivory and Sime, una sociedad de inversiones londinense (febrero de 2002).

⁴⁸ Afirmaciones atribuidas a Shell Oil Co. y citadas por Friends Ivory and Sime, *ibidem*.

Amnistía Internacional sostiene que toda sociedad en la que la corrupción se da de forma generalizada es susceptible de sufrir decisiones arbitrarias e injustas que menoscaban el Estado de derecho y perjudican la situación de los derechos humanos. Las empresas desempeñan un papel muy importante para contrarrestar la corrupción en cualquier país, y la Federación Rusa no es una excepción. Las empresas pueden tomar medidas destinadas a evitar prácticas corruptas por medio de la creación y la implantación de políticas conformes con el creciente frente común internacional contra la corrupción.

También aumenta el consenso internacional respecto a la imposibilidad del buen gobierno en un contexto donde impere la corrupción. Dicho en palabras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: «El gobierno es el proceso por el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, administran los recursos públicos y garantizan la aplicación de los derechos humanos. El buen gobierno se encarga de todo ello de una manera esencialmente libre de abusos y corrupción, con la debida conformidad con el Estado de derecho».⁴⁹

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha manifestado que, debido a la corrupción, los más pobres reciben un nivel inferior de servicios sociales y soportan una mayor carga fiscal.⁵⁰ La corrupción retrasa el desarrollo,⁵¹ lo que a su vez retrasa la implantación progresiva del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.⁵² Al favorecer a un grupo en detrimento de otro, la corrupción perpetúa la discriminación. El mantenimiento de una administración corrupta impone limitaciones a la libertad de expresión (especialmente a quienes denuncian las prácticas corruptas), así como el abuso del poder estatal, con la consecuente violación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. De este modo, la corrupción contribuye a la aparición de abusos contra los derechos humanos desde todos los puntos de vista.

En una resolución adoptada en 1997, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por la «gravidad de los problemas que plantea la corrupción, que puede poner en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades, socavar los valores de la democracia y la moral y comprometer el desarrollo social, económico y político».⁵³

Corrupción y normas internacionales de derechos humanos

El hecho de que las autoridades toleren o perpetúen la corrupción es causa directa o indirecta de infracciones de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como las que imponen los tratados internacionales fundamentales ratificados por la Federación Rusa. Estos tratados son, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

⁴⁹ La traducción de esta cita es de EDAI. Véase el texto en inglés en <www.unhchr.ch/development/governance-01.htm>.

⁵⁰ Véase *Fighting Corruption to Improve Good Governance* (Combatir la corrupción en favor del buen gobierno), PNUD, Nueva York, 1999.

⁵¹ Véase, por ejemplo, el informe de P. Mauro, «Corruption and the Composition of Government Expenditure» (La corrupción y la composición del gasto público), publicado en *Journal of Public Economics*, 69: 263-279, donde se presenta una correlación negativa entre la corrupción y el gasto público de educación.

⁵² Véase, por ejemplo, el informe de Nihal Jayawickrama, «Corruption – A Violation of Human Rights?» (La corrupción, ¿violación de derechos humanos?) en <www.transparency.org>. En el documento, presentado en la Conferencia de Sofía en junio de 1998, se afirma entre otras cosas: «El concepto de aplicación progresiva [de los derechos económicos, sociales y culturales], aunque es suficientemente flexible como para reflejar las realidades del mundo real y las dificultades a las que se enfrentan los países para garantizar la plena aplicación de todos los derechos en el plazo más breve posible, impone no obstante una clara obligación de avanzar de la forma más pronta y efectiva hacia tal meta, empleando el máximo de recursos al alcance de cada país. La corrupción actúa en contra de esta obligación.»

⁵³ Resolución 51/59, de 28 de enero de 1997.

[CUADRO]

Las empresas deben recordar que los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (como es el caso de la Federación Rusa) están obligados a respetar, proteger, promover y aplicar los derechos proclamados por estos dos tratados. Los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos consagrados en ambos Pactos y tienen el deber de impedir toda violación de estos derechos por parte de terceros. Los Estados tienen la obligación de tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales y económicas apropiadas y todas aquellas medidas necesarias para la plena aplicación de estos derechos. Los Estados Partes deben rendir cuentas tanto a la comunidad internacional como a sus ciudadanos respecto al cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de ambos Pactos.

[FIN DEL CUADRO]

Cuando una autoridad toma una decisión basada en su enriquecimiento personal, está dejando de hacer todo lo que esté en su mano para promover los derechos humanos de sus ciudadanos. Por ejemplo, los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se comprometen a tomar medidas para proteger el derecho al empleo (artículo 6). Si se convence a una autoridad por medios corruptos o mediante soborno para que favorezca un proyecto que requiere excesivo capital, dicha autoridad está incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de este tratado.⁵⁴ De igual forma, si la corrupción induce a que un servicio básico como la atención médica o la educación se privatice de forma que beneficie a las empresas pero restrinja su acceso a las personas sin recursos económicos, el Estado habrá incumplido los deberes a los que le obliga el tratado. Lo mismo se aplica a una situación en la que la corrupción sea la causante de un mal aprovechamiento de los recursos o provoque un peligro para la población, como sería el caso de la compra de materiales de construcción que no cumplen con los requisitos mínimos.

Con vistas a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacados expertos en derecho internacional han elaborado dos conjuntos de principios: los Principios de Limburg⁵⁵ y las Directrices de Maastricht.⁵⁶ En ellos se explican a los gobiernos sus obligaciones en virtud del Pacto y se presentan ejemplos de violaciones de este tratado. Además, se señala que, de conformidad con el derecho internacional, el incumplimiento por parte de un Estado de una obligación establecida por el Pacto constituye una violación de éste, y que los Estados son tan responsables de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales como de las de los derechos civiles y políticos.

Las empresas traspasan los costes de la corrupción a los consumidores, con lo que, a fin de cuentas, es el conjunto de la sociedad el que paga el precio de la corrupción. «No se utiliza el máximo de recursos al alcance ni de la forma más efectiva posible para la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales cuando una parte sustancial de los recursos nacionales se desvía a la cuenta bancaria privada de un jefe de Estado, o cuando las ayudas al desarrollo se administran mal, se malversan o se desfalcan».⁵⁷

Algunos ejemplos de corrupción como causante directa de violaciones en todo el mundo de derechos civiles y políticos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son: el desalojo forzado de población indígena de las tierras donde reside, el vertimiento ilícito de desechos tóxicos en una zona habitada, el soborno de jueces para influenciar su fallo, el cierre de periódicos independientes por parte de funcionarios corruptos y el fraude electoral.

Se puede afirmar que la corrupción puede consistir en sí misma una violación de los derechos humanos fundamentales por el efecto que causa en las relaciones de los ciudadanos con el Estado: «El discurso

⁵⁴ Véase Jayawickrama (*ibidem*).

⁵⁵ Principios de Limburg sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1986.

⁵⁶ Directrices de Maastricht sobre Violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1997.

⁵⁷ Véase Jayawickrama (*ibidem*).

de derechos humanos posibilita el reconocimiento de los efectos que tiene la corrupción en una persona, especialmente en lo que respecta al contacto que ésta mantiene con el Estado. El sufrimiento de la población por las prácticas corruptas queda oculto con demasiada frecuencia por argumentos eufemísticos y vagos sobre el grado de desarrollo y de pobreza que contribuyen a desviar la atención nacional o internacional y no permiten estimular la toma de decisiones necesarias».⁵⁸

La corrupción en la Federación Rusa

A tenor de los informes al respecto, la corrupción se infiltró en las más altas instancias del gobierno de la Federación Rusa en el período posterior a 1991, cuando personas que se habían apoderado de parte de la economía rusa ocuparon cargos en el gobierno y se concedieron a sí mismas licencias, privilegios y cuotas.⁵⁹

Grandes cantidades de dinero destinadas a proyectos de restauración en Chechenia fueron desviadas a otras manos. El periódico *Segodnya* publicó varios informes que revelaban que, entre 1994 y 1996, mientras el gobierno federal dedicaba cada vez más recursos a la reconstrucción de Chechenia (a la vez que seguía manteniendo operaciones bélicas), no había ninguna actividad sobre el terreno que indicase que se estaba llevando a cabo restauración o rehabilitación alguna.⁶⁰ La Cámara de Cuentas, una auditoría de la Federación Rusa independiente, echó en falta 1.000 millones de dólares de los fondos destinados a la administración y a la reconstrucción de Chechenia.

La corrupción se practica de forma generalizada en toda la Federación Rusa. La Cámara de Cuentas descubrió recientemente que, en 1997, se había malgastado una sexta parte del presupuesto estatal, lo que suponía una pérdida de casi 10.000 millones de dólares. También expuso casos de corrupción en los que intervenían algunas de las mayores empresas rusas y departamentos gubernamentales. Estos casos estaban relacionados, por ejemplo, con la venta de oro sin autorización, la retención ilegal de comisiones, la licitación ilegal de propiedades estatales⁶¹ e irregularidades financieras. Mientras ciertas personas se enriquecían de forma vertiginosa, grandes sectores de la sociedad se empobrecían rápidamente.

Iniciativas contra la corrupción

Hay una fuerte corriente empresarial que aboga porque las empresas ejerzan presión para lograr una infraestructura jurídica más efectiva para la lucha contra las prácticas corruptas en la Federación Rusa. Un caso ilustrativo es el que afectó a la empresa estadounidense Euro-Asia Investment Holdings, que, cuando reclamó una deuda de 6 millones de dólares que le correspondía después de que un tribunal fallase a su favor, se encontró con que la empresa rusa deudora había desaparecido sin más. Una empleada de la empresa estadounidense recibió una amenaza de muerte cuando insistió en el cobro de la deuda.

⁵⁸ Véase *Human Rights and Corruption* (Derechos humanos y corrupción), un trabajo de investigación del Centro de Instituciones Democráticas escrito por Zoe Pearson, de la Facultad de Derecho de la Australian National University. El proyecto fue supervisado por Hilary Charlesworth, directora del Centro de Derecho Internacional y Público de la Australian National University.

⁵⁹ Piontkowsky, *ibidem*. El autor cita una entrevista concedida a *Financial Times* por Boris Berezovsky, que declaró: «Nosotros contratamos a Anatoly Chubais [dirigente ruso que promovió la privatización]. Invertimos enormes cantidades de dinero en la campaña electoral. Nos encargamos de que Yeltsin ganara las elecciones. Ahora, tenemos derecho a ocupar puestos en el gobierno y cosechar los frutos de nuestra victoria».

⁶⁰ Según informan muchas ediciones de *Segodnya* a lo largo de 1995. Por ejemplo, en septiembre de 1995, el líder del Partido Agrario ruso, Mikhail Lapshin, convocó una conferencia de prensa en Moscú a su regreso de una visita a la región del Cáucaso Norte. En ella declaró que, mientras los constructores rusos informaban de «la restauración de 7.000 residencias destruidas en Chechenia en el transcurso de las acciones militares», él no vio «ni una de estas residencias [restauradas]» en el transcurso de su visita. (*Segodnya*, 13 de septiembre de 1995).

⁶¹ Véase, por ejemplo, *Sale of the Century: The Inside Story of the Second Russian Revolution* (La venta del siglo: la verdad sobre la segunda revolución rusa), Chrystia Freeland, Little, Brown and Co. (2000). También, *The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia* (Los oligarcas: riqueza y poder en la nueva Rusia), David E. Hoffman, Public Affairs (2002).

Las empresas que inciten a sus gobiernos a abordar el problema de la corrupción deben tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos. En algunos Estados, supuestas campañas contra la corrupción han servido para perseguir a disidentes, justificar la represión o cometer nuevas violaciones de derechos humanos.

Las empresas pueden recordar a las autoridades el creciente grueso de políticas e instrumentos internacionales para combatir la corrupción y la necesidad de actuar en consonancia con los principios de derechos humanos.

Ciertos países disponen de legislación que prohíbe el soborno en el extranjero.⁶² Algunas empresas estadounidenses que actúan en la Federación Rusa, afectadas por incidentes como amenazas de muerte o la ocupación de sus instalaciones por parte de fuerzas de seguridad privadas, han presionado a representantes de su gobierno para que trataran con sus homólogos rusos el problema de la corrupción y la falta de respeto de las leyes.

Tanto el Consejo de Europa como la Organización de los Estados Americanos han emprendido iniciativas de ámbito regional. La Federación Rusa firmó en enero de 1999 el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Corrupción en el Ámbito del Derecho Penal,

Las iniciativas de ámbito internacional son diversas. Una de ellas es el Programa Mundial contra la Corrupción, coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito. En 1996, la Asamblea General de la ONU adoptó una Declaración sobre la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales⁶³ y un Código Internacional de Conducta para Funcionarios Públicos,⁶⁴ en el que se reconocían la gravedad de los problemas planteados por las prácticas corruptas y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. En 1997 y 1998, la Asamblea General adoptó resoluciones en las que pedía una acción internacional contra la corrupción por parte de los Estados.^{65 66} Estas resoluciones expresan de forma significativa la amplia adhesión política dentro de la comunidad internacional.

Las empresas pueden buscar en la propia Federación Rusa la asistencia de coaliciones locales contra la corrupción, como el proyecto Empresarios por el Respeto de las Leyes, los grupos de protección de los derechos de los accionistas, los activistas políticos o la Cámara de Cuentas. El Foro Económico Mundial ha lanzado una iniciativa para regular la gestión corporativa en la Federación Rusa.⁶⁷

Aunque la Federación Rusa no es miembro de la OCDE, la mayoría de los inversores extranjeros pertenecen a países miembros. La OCDE adoptó en diciembre de 1997 un Convenio de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.⁶⁸

Las empresas pueden ampararse también en iniciativas promovidas por sectores empresariales para combatir la corrupción. Algunas de esas iniciativas son: el proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable, coordinado por el Instituto Internacional de Desarrollo y Medio Ambiente, con sede en el Reino Unido; los Principios de Wolfsberg contra el blanqueo de dinero para entidades bancarias; el Grupo Especial contra la Corrupción de la Asociación del Petróleo y del Gas; y las normas de integridad de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, dirigidas a las empresas de ingeniería y que tienen como objetivo la reducción de la corrupción en la concesión de subvenciones para adquisiciones públicas por parte del sector privado. El sitio web de la ONG Transparencia Internacional,⁶⁹ con sede en Berlín, ofrece recursos para ayudar a las empresas a manejarse en economías difíciles sin tener que ceder a la corrupción.

⁶² Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977) de Estados Unidos, por ejemplo.

⁶³ Resolución 51/191, de 21 de febrero de 1997.

⁶⁴ Resolución 51/59, de 28 de enero de 1997.

⁶⁵ Resolución 52/87, de 2 de febrero de 1998.

⁶⁶ Resolución 53/176 de 25 de enero de 1999.

⁶⁷ <www.weforum.org>

⁶⁸ Consulten la lista de países que han ratificado el Convenio en el Apéndice 2.

⁶⁹ <www.transparency.org>

Violaciones de derechos humanos en la Federación Rusa

Con el fin de fomentar el respeto por los derechos humanos en la Federación Rusa, los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo lanzaron en noviembre de 2002 una campaña centrada en violaciones graves y específicas de los derechos humanos y del derecho internacional cometidas por las fuerzas de seguridad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Rusia.⁷⁰

En toda la Federación Rusa, las torturas o malos tratos a hombres, mujeres y niños por parte de los encargados de hacer cumplir la ley parecen ser una práctica casi rutinaria. La mayoría de las personas recluidas en centros de detención preventiva soportan condiciones que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Se estima que la población reclusa en la Federación Rusa asciende a unas 850.000 personas.⁷¹ El índice de encarcelamiento del país se encuentra entre los más elevados del mundo.

Numerosas fuentes fidedignas señalan que, en el marco del conflicto de Chechenia, las fuerzas de seguridad rusas han cometido ataques contra civiles, violaciones sexuales y otras formas de tortura, «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas chechenas también han cometido abusos, según los informes al respecto.

Esta campaña señala la falta de rendición de cuentas de los que cometen estos abusos, hecho que Amnistía Internacional considera uno de los principales factores de la persistencia de tales abusos. También pone de manifiesto los obstáculos con los que se enfrentan las víctimas cuando tratan de obtener reparación (particularmente las mujeres, los niños y los miembros de minorías étnicas o nacionales), y las medidas que es preciso adoptar para conseguir que se les haga justicia.

La campaña pretende poner de relieve la contradicción que existe entre la protección de los derechos humanos que el derecho interno e internacional brinda a toda la población de Rusia y la realidad que vive el país, donde se cometen con impunidad abusos generalizados contra los derechos humanos. Los miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo instarán al gobierno de la Federación Rusa a dar cumplimiento a su obligación de proteger y promover los derechos humanos y conseguir así justicia para todos. Encontrarán más información en el informe de la campaña, *Federación Rusa: Negación de justicia* (Índice AI: EUR 46/027/2002/s).

Las empresas que deseen desempeñar actividades en la Federación Rusa de forma responsable deben tener en cuenta apremiantes cuestiones de derechos humanos.

Violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal

- Toda persona recluida en la Federación Rusa se encuentra con prisiones abarrotadas y condiciones atroces. En celdas con un espacio de menos de 100 metros cuadrados pueden hacinarse 100 presos, que deben hacer turnos para dormir. Existe una incidencia generalizada de enfermedades mentales y las enfermedades contagiosas se propagan con gran rapidez. En mayo del 2002, el viceministro de Justicia declaró, según los informes, que más de la mitad de los presos de Rusia estaban enfermos, incluidos 92.000 con tuberculosis, 33.600 con SIDA/VIH y 30.000 con sífilis.⁷²
- Se encarcela de forma masiva a menores, muchos de ellos detenidos por la policía por delitos de pequeña importancia. Es bastante común que los niños pasen meses, e incluso años, privados de libertad en los centros de detención preventiva o cumpliendo largas condenas de prisión impuestas por delitos relativamente menores. Según el Ministerio de Justicia, a mediados del 2001 había más de 17.000 niños cumpliendo condena en 64 colonias especiales para menores. Muchos más se hallaban recluidos en centros de prisión preventiva, hacinados en celdas sucias, mal ventiladas e infestadas de parásitos.

⁷⁰ *Federación Rusa: Negación de justicia* (Índice AI: EUR 46/027/2002/s), Amnistía Internacional, 2002.

⁷¹ Información procedente de la delegación moscovita de la ONG Reforma Penal Internacional.

⁷² AFP, 4 de mayo de 2002.

- La policía emplea, casi por sistema, torturas y malos tratos contra personas bajo custodia policial para obtener de ellas confesiones. Estas personas se encuentran expuestas a un mayor peligro de sufrir torturas y malos tratos bajo custodia durante las primeras horas de detención, antes de que se les imputen cargos. Los métodos de tortura más citados en los informes son, entre otros, las palizas, las descargas eléctricas, la violación, el uso de máscaras de gas para semiasfixiar a la víctima y la práctica de atar a los detenidos en posturas dolorosas. Las víctimas pertenecen a todos los sectores sociales, pero los miembros de minorías étnicas y las personas con menos recursos económicos son los más expuestos.
- Los oficiales de las fuerzas armadas continúan permitiendo, alentando y a menudo participando en la *dedovshchina*, la violenta y cruel iniciación de los jóvenes reclutas que, en el mejor de los casos, supone forzarlos a hacer trabajos desagradables, a menudo fuera de lo que son los deberes oficiales, y en el peor de los casos implica palizas, tortura, asesinato y suicidio.
- Hay una constante de impunidad ante la práctica de la tortura y los malos tratos que beneficia tanto a los funcionarios civiles como a los militares.

Discriminación y violencia de motivación étnica

- La discriminación contra la mujer en la Federación Rusa se refleja en la persistencia de la violencia doméstica y se agrava por la falta de medidas oficiales para evitarla. Las autoridades rusas han manifestado que mueren 14.000 mujeres al año a manos de sus esposos o de otros familiares. Pese a ello, es muy poco probable que los hombres que golpean o violan a sus esposas o cometen otros actos de violencia doméstica se sienten en el banquillo. La legislación no tipifica claramente como delito la violencia doméstica y ni siquiera prevé que los autores de tales abusos reciban una advertencia oficial en forma de pena administrativa o de multa. Ninguna de las casi 50 versiones de una ley nacional dedicada a la violencia doméstica ha logrado ser aprobada por el Parlamento.
- Abunda la discriminación contra personas pertenecientes a ciertos grupos étnicos o nacionales, incluidos los chechenos y otros ciudadanos rusos, así como los trabajadores inmigrantes de territorios de la antigua Unión Soviética y los refugiados procedentes de lugares más lejanos. Existe un amplio consenso sobre la relación que existe entre las prácticas discriminatorias y el sistema de registro y su aplicación, particularmente en Moscú. En 1991 se abolió el sistema de *propiska*, en virtud del cual había que inscribir en registro el lugar de residencia y estaba prohibido mudarse sin permiso oficial. No obstante, aunque con variantes, algunos gobiernos locales continúan aplicando este sistema.⁷³
- Las prácticas discriminatorias relacionadas con la expedición de pasaportes y de permisos de residencia sellados exponen a la detención arbitraria, a la extorsión y al pago de sobornos a toda la población de la Federación Rusa (en particular, a las personas fácilmente identificables como no eslavas), además de privarla de numerosos derechos civiles y políticos. En marzo de 2002, el gobernador del territorio sureño de Krasnodar anunció su intención de iniciar una campaña de expulsión a gran escala de «migrantes ilegales», entre los que se incluye a varios miles de ex ciudadanos de la Unión Soviética a quienes las normas discriminatorias locales impiden reclamar su derecho a la ciudadanía rusa y a la residencia oficial.
- La violencia de motivación étnica constituye un grave problema, especialmente en las ciudades, y afecta a estudiantes y refugiados de origen africano, así como a personas judías y a población

⁷³ La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló que las autoridades de la Federación Rusa habían hecho notables progresos en la abolición de los restos del antiguo sistema de *propiska* (registro interno), pero lamentó que continuaran aplicándose a las minorías étnicas, a menudo de manera discriminatoria, requisitos de registro restrictivos. En vista de ello, la Asamblea reiteró el llamamiento que había hecho en su recomendación 1544 (2001), en la que instaba a los Estados miembros afectados a emprender una revisión exhaustiva de las leyes y políticas nacionales, con miras a eliminar toda disposición que pueda impedir ejercitar el derecho a la libertad de circulación y elegir el lugar de residencia dentro de las fronteras internas. Véase Resolución 1277 (2002), párr. 8, xii; texto aprobado por la Asamblea Parlamentaria el 23 de abril de 2002 (11ª sesión).

procedente del norte y del sur del Cáucaso (incluidos individuos de etnia chechena), del sur, del sureste y del centro de Asia, de Oriente Medio y de Latinoamérica. Muchos ataques racistas no se denuncian a la policía, como en los casos en los que las víctimas son refugiados o miembros de minorías raciales o étnicas que, no sin razón, temen sufrir hostigamiento y extorsión si se ponen en contacto con ella, ya que es frecuente que la policía no reconozca como válidos sus documentos de identidad o que se les haya negado el registro o el pasaporte por la institucionalizada discriminación. La policía es con frecuencia reacia a reconocer la motivación racista de tales ataques y, a menudo, altos cargos policiales han calificado públicamente los ataques racistas de simple «gamberrismo ebrio».

- Las disposiciones legales para los solicitantes de asilo son inadecuadas. Muchos de ellos están expuestos a la devolución forzosa (*refoulement*), que les obligaría a regresar a países donde corren el riesgo de ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos, antes de que se haya prestado la atención debida a su solicitud de asilo.

Limitaciones a la libertad de expresión

- Las limitaciones a la libertad de expresión comportan incluso el encarcelamiento de presos de conciencia, como la pena de cuatro años de cárcel impuesta al ecologista Grigory Pasko por revelar el vertido ilegal de residuos nucleares por parte de la armada rusa, o la persecución por motivaciones políticas de la periodista independiente Olga Kitova, condenada en diciembre de 2001 por calumnias, insultos o amenazas a un funcionario tras denunciar un caso de corrupción oficial. Otro caso célebre es el del oficial de la marina retirado Alexandr Nikitin, a quien en 1996 se imputaron cargos de espionaje y revelación de secretos de Estado por sus escritos sobre los peligros de contaminación radiactiva que representaba la Flota Rusa del Norte. Nikitin no recibió la absolución hasta el año 2000.
- Se ha forzado el cierre o se ha procedido a la apropiación de varios medios independientes de noticias. En abril de 2001, el gigante empresarial Gazprom, productor de gas y de propiedad parcialmente estatal, absorbió por la fuerza el grupo Media-Most, que aglutina a la cadena independiente de televisión NTV (conocida por el ángulo crítico de su información sobre las acciones del gobierno, como en el caso del conflicto armado de Chechenia), el diario nacional *Segodnia*, el semanario de noticias *Itogi* y la cadena de radio *Ekho Moskvy*. Seguidamente, Gazprom despidió a la redacción de *Itogi* y clausuró por completo la edición de *Segodnia*. Asimismo, cambió la directiva, incluido el director ejecutivo, de la cadena NTV, e instó el despido de gran parte de la plantilla. El posterior cierre de TV-6, propiedad de Boris Berezovsky, prominente opositor del presidente Putin, se interpretó en general como una acción con motivaciones políticas, vinculada al cierre de NTV.

El conflicto de Chechenia

- El conflicto armado en Chechenia ha dado lugar a informes generalizados y fiables que indican que las fuerzas rusas han sido responsables de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tales como «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, incluida la violación sexual. Estos abusos se cometen especialmente en «operaciones especiales» o «limpiezas» y están respaldados por la creación de centros ilegales de detención temporal, como los «campos de filtración».
- Las fuerzas rusas practican de forma arbitraria detenciones, torturas y homicidios de miles de civiles. Muchas de las detenciones a manos de estas fuerzas se efectúan durante los controles de identidad a que someten a los convoyes de civiles que viajan de Chechenia a Ingushetia o durante incursiones militares (conocidas como *zachistki* u operaciones «de limpieza») efectuadas en zonas pobladas. Estas incursiones van acompañadas de abusos generalizados contra la población civil. Los informes indican que se ha sometido a civiles, entre ellos mujeres y niños, a secuestros, violaciones sexuales, otras formas de tortura y homicidio.

- Los detenidos son encerrados en instalaciones que en algunos casos son poco más que un pozo excavado en el suelo, sin que se les permita el acceso a familiares, abogados y al mundo exterior en general. Los supervivientes han declarado que la tortura es habitual y se practica por sistema, y han descrito violaciones de detenidos de ambos sexos, palizas con martillos y porras, y torturas con descargas eléctricas y gas lacrimógeno.
- Cerca de 300.000 personas, mujeres y niños en su mayoría, han huido de sus hogares para escapar del conflicto armado. A mediados de 2002, 160.000 personas aproximadamente residían en asentamientos temporales o en campos de desplazados, la mayoría en la vecina Ingushetia, donde debían hacer frente a condiciones de hacinamiento y a extremas privaciones. El 29 de mayo de 2002, el presidente de Ingushetia y el jefe de la administración chechena, favorable a Moscú, firmaron un acuerdo que establecía que «todos los refugiados chechenos deben ser devueltos de Ingushetia antes del fin de septiembre». Este acuerdo puede obligar a los desplazados internos chechenos a regresar a Chechenia, donde peligrarían sus vidas y donde las organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales sólo tienen un acceso limitado.
- También se han documentado abusos a manos de las fuerzas chechenas. Según la información recibida, los combatientes chechenos que han actuado en zonas pobladas y en sus alrededores no han tomado medidas para proteger a los civiles. Se afirma asimismo que han atacado a miembros civiles de la administración, favorable a Moscú, en operaciones en las que decenas de personas han muerto o han resultado gravemente heridas, y también han secuestrado a civiles y los han utilizado como rehenes. Asimismo, las fuerzas chechenas han declarado haber ejecutado a miembros de las fuerzas armadas rusas que habían sido hechos prisioneros.

¿Qué pueden hacer las empresas?

Las empresas que operan en la Federación Rusa deben conocer bien el clima de derechos humanos en el país para evitar participar en modo alguno en abusos, directa o indirectamente, en su oferta de servicios, artículos o inversiones. Las empresas deben hacer todo lo que esté en su mano para proteger los derechos humanos de sus empleados y las personas que éstos tengan a su cargo.

[CUADRO]

Amnistía Internacional insta a las empresas que desempeñan su actividad en la Federación Rusa a tener en cuenta los Principios de Derechos Humanos para Empresas de Amnistía Internacional y a aplicarlos en su sector y circunstancias particulares.

[FIN DEL CUADRO]

Hay otras medidas que pueden tomar las empresas, dentro de su ámbito de influencia. La corrupción y la falta de transparencia y de respeto de las leyes afectan a los negocios a la vez que tienen un efecto adverso en los derechos humanos. Las empresas que desempeñan su actividad en la Federación Rusa tienen derecho a insistir en que se cumplan las normas internacionales en el ámbito de la práctica empresarial.

Redacten su propio código de conducta

Las empresas que ejercen actividades en la Federación Rusa deben elaborar un código de conducta propio que reconozca explícitamente la importancia de respetar los derechos humanos. Al hacerlo, deben tener en cuenta la Declaración Universal de Derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta medida permitirá a las empresas evaluar los efectos de sus actividades y políticas desde una perspectiva de derechos humanos y recordará a las empresas los acuerdos y tratados internacionales firmados por sus gobiernos y la conducta que se espera de ellas. Este código de conducta debe aplicarse a todas las líneas de actuación y jerarquías de la empresa, así como a sus filiales, socios, colaboradores y proveedores.

Eviten prácticas corruptas

Las empresas deben emprender todas las medidas apropiadas para evitar tomar parte en actos corruptos. La preservación de una estructura corrupta no sólo da lugar a violaciones de derechos civiles y políticos, sino que desvía a fines ilegítimos los recursos destinados a fines legítimos. Siendo así, la corrupción impide que el Estado cumpla con su obligación de hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales.

Si la sede social de su empresa está situada en un Estado miembro de la OCDE o que ha ratificado el Convenio de la OCDE de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, este tratado le brinda a su compañía un manto protector para evitar la complicidad en actos corruptos.

Si su empresa pertenece a un Estado de la OCDE, las Directrices para Empresas Multinacionales de este organismo ofrecen un marco adicional que ayuda a su empresa a actuar de forma socialmente responsable.

Garanticen el respeto de los derechos humanos

La seguridad de los empleados y activos de la empresa es un interés legítimo. Para que la actuación del personal encargado de la seguridad respete los derechos humanos, Amnistía Internacional hace un llamamiento a las empresas para que investiguen detenidamente el historial de toda empresa cuyos servicios de seguridad proyecte requerir.

Todo agente de seguridad (sean funcionarios públicos o empleados de empresas privadas) debe tener en cuenta y acatar las normas establecidas por el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Las empresas dedicadas al sector extractivo deben tener en cuenta los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

Las empresas también deben cerciorarse de no ofrecer recursos (militares, logísticos o financieros, entre otros) que puedan ayudar a un Estado o a una empresa privada de seguridad a cometer violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional insta a las empresas que empleen presos a tomar todas las precauciones necesarias para proteger los derechos humanos de los presos contratados. Las empresas que empleen presos deben garantizar que no incurren en el trabajo forzado y que no se violan los derechos de los presos.

No participen en el comercio de diamantes de zonas de conflicto

Si su empresa opera en el sector de los diamantes, debe informarse sobre las cuestiones relacionadas con el comercio de diamantes procedentes de zonas de conflicto. El Proceso de Kimberley en relación con los diamantes de zonas en conflicto⁷⁴ es un proceso de negociación internacional encaminado a eliminar el comercio de diamantes procedentes de zonas de conflicto que incumbe a las empresas, las ONG y a los países que participan en la extracción, el procesamiento y el comercio de diamantes, y que afecta particularmente a la Federación Rusa. En el transcurso de los años 1999 y 2000 hubo un notable aumento de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Sierra Leona por las fuerzas del Frente Revolucionario Unido. Este grupo opositor armado financiaba sus actividades con la venta de diamantes de Sierra Leona en el mercado internacional a través de Liberia, cuyas exportaciones de

⁷⁴ <www.kimberleyprocess.com>

diamantes presentaron un auge inesperado. La creciente preocupación por esta situación dio lugar a la imposición por parte de la comunidad internacional de sanciones a la exportación de diamantes procedentes de Sierra Leona, pero Liberia siguió con sus exportaciones. Por aquel entonces, representantes del sector alegaban que los diamantes que Liberia exportaba eran rusos y no sierraleoneses. Estas confusas circunstancias pudieron darse debido a la falta de vigilancia de las exportaciones en la Federación Rusa.⁷⁵ Así pues, los compradores que deseen adquirir diamantes rusos en bruto deben cerciorarse de que proceden de Rusia, para impedir la introducción de diamantes de zonas de conflicto en el comercio internacional bajo la apariencia de diamantes rusos.

Hagan pública la información

Amnistía Internacional insta a las empresas a que presenten informes periódicos y verificables sobre su actuación bajo una perspectiva de derechos humanos. Amnistía Internacional anima a las empresas a seguir los procedimientos establecidos en la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes,⁷⁶ un marco de referencia voluntario que permite a las empresas evaluar su actuación y presentar informes al respecto.

El Pacto Mundial de la ONU: un instrumento útil

El Pacto Mundial de la ONU⁷⁷ es una iniciativa con nueve principios, de los que dos tratan de los derechos humanos, cuatro de las normas de trabajo y tres del medio ambiente. Los dos principios de derechos humanos son así de simples: las empresas no deben cometer abusos contra los derechos humanos y deben fomentar el respeto de dichos derechos. El Pacto Mundial de la ONU permite a las empresas que lo han suscrito insistir sobre el respeto de estos principios cada vez que se encuentren con un problema que se oponga a su compromiso con estas normas de derechos humanos, de trabajo y de medio ambiente.

Algunas empresas rusas han empezado ya a participar en el Pacto Mundial. Yukos Oil, la segunda mayor empresa petrolera de la Federación Rusa, se ha incorporado al Pacto Mundial y se ha comprometido a elaborar e impulsar proyectos destinados a promover la paz, el acceso a tecnologías digitales y la atención médica en Federación Rusa y los países circundantes, en colaboración con una Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.

Ejerzan su influencia para promover los derechos humanos

Las empresas extranjeras que colaboran con empresas rusas pueden promover con su propia práctica los derechos humanos.

Por ejemplo, las empresas pueden insistir en la igualdad de trato para todas las personas, independientemente del sexo o del origen étnico. Muchas empresas extranjeras que desempeñaban actividades en Sudáfrica durante los últimos años del *apartheid* seguían los Principios de Sullivan, que proclamaban la no distinción de raza en el trabajo.

Dado que la Federación Rusa está integrada en la economía internacional, debe seguir las normas internacionales. Eso implica su adhesión al respeto de las leyes y la prohibición efectiva de la arbitrariedad y la corrupción. La Federación Rusa necesita justicia para todos y derechos humanos para todos.

⁷⁵ Basado en entrevistas exhaustivas y contactos entre Amnistía Internacional y otras ONG y representantes del sector internacional del diamante (1999-2002).

⁷⁶ <www.globalreporting.org>

⁷⁷ Iniciativa del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, con la participación de alrededor de 400 empresas de todo el mundo con voluntad de adherirse a las normas internacionales en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente.

Apéndice 1. Principios de Derechos Humanos para Empresas

1. **Política de empresa sobre derechos humanos.** Toda empresa debe adoptar una política de empresa explícita sobre derechos humanos que incluya apoyo público a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las empresas deben establecer procedimientos para garantizar que se examinan los posibles efectos de todas sus actividades sobre los derechos humanos. Asimismo, deben garantizar que su personal no se verá implicado jamás en abusos contra los derechos humanos. La política de la empresa debe permitir los contactos con las autoridades locales, provinciales y nacionales para tratar casos concretos de violaciones de derechos humanos y la necesidad de crear salvaguardias para proteger los derechos humanos. Debe también facilitar la creación de programas educativos y de formación en derechos humanos para todos los empleados de la empresa y fomentar la acción colectiva en asociaciones empresariales para promover el respeto a las normas internacionales de derechos humanos.
2. **Seguridad.** Toda empresa debe garantizar que los sistemas de seguridad que adopta protegen los derechos humanos y están de acuerdo con las normas internacionales para la aplicación de la ley. Las empresas deben formar adecuadamente a todo el personal de seguridad que empleen o contraten. Los procedimientos deben ser consecuentes con los Principios Básicos de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y con el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Deben incluir medidas para impedir el empleo excesivo de la fuerza, así como la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante. Las empresas deben establecer normas claras para solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado o contratarlas y para prohibir la contratación de personal de seguridad que haya sido responsable de graves violaciones de derechos humanos. Cualquier queja sobre los procedimientos o el personal de seguridad se debe investigar de inmediato y de forma independiente. Las empresas que suministran material o servicios militares, de seguridad o policiales deben tomar medidas rigurosas para evitar que el material o los servicios se empleen para cometer violaciones de derechos humanos.
3. **Compromiso con la comunidad.** Toda empresa debe adoptar medidas razonables para garantizar que sus actividades no tienen consecuencias negativas sobre el disfrute de los derechos humanos de la comunidad donde las desarrolla. Debe estar dispuesta a reunirse con los dirigentes locales y las organizaciones de voluntarios para tratar el papel desempeñado por la empresa en la comunidad en general. La empresa debe brindar su apoyo a actividades y organizaciones promotoras de derechos humanos, por ejemplo colaborando en programas de educación, formación o civismo que contengan cuestiones sobre derechos humanos y con organizaciones defensoras de los derechos humanos.
4. **Derecho a no ser discriminado.** Toda empresa debe garantizar que su política y procedimientos impiden la discriminación por motivos de origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, posición económica, religión, ideas políticas u otras convicciones profundas, nacimiento o cualquier otra condición. Además no debe hacer distinción alguna en la selección, ascenso, remuneración y condiciones

laborales del personal, ni tampoco en el servicio al cliente ni en las prácticas de los contratistas, proveedores y socios. Debe establecer medidas para hacer frente al acoso sexual o racial, y prohibir la intolerancia nacional, racial o religiosa.

5. **Derecho a no ser sometido a esclavitud.** Toda empresa debe garantizar que su política y procedimientos prohíben el uso de esclavos, el trabajo forzado y el empleo de trabajadores cautivos menores de edad o de reclusos forzados. Además debe garantizar que los proveedores, socios o contratistas no emplean esta clase de mano de obra.
6. **Salud y seguridad.** Toda empresa debe garantizar que su política y procedimientos proporcionan condiciones laborales y productos sanos y seguros. La empresa no debe utilizar ni apoyar medidas como castigos corporales, coacción mental o física o insultos.
7. **Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva.** Toda empresa debe garantizar que los empleados pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, así como a un medio favorable para la negociación colectiva sin discriminación, incluido el derecho a fundar sindicatos y a declararse en huelga. La empresa tiene la obligación de garantizar estos derechos a sus empleados aunque no estén protegidos por la legislación nacional de un país concreto. Las empresas deben tomar medidas para garantizar que los proveedores, socios o contratistas no violan estos derechos.
8. **Condiciones de trabajo equitativas.** Toda empresa debe garantizar condiciones de trabajo equitativas y favorables, una seguridad razonable de empleo y una remuneración y beneficios equitativos y satisfactorios. Debe proporcionar un nivel de vida adecuado para los empleados y sus familias. Las empresas deben tomar medidas para garantizar que los proveedores, socios o contratistas no violan estos derechos.
9. **Vigilancia del cumplimiento de las normas de derechos humanos.** Toda empresa debe establecer mecanismos para garantizar de manera efectiva que todas sus actividades cumplen los códigos de conducta y las normas internacionales de derechos humanos. Estos mecanismos deben ser verosímiles y todos los informes se deben comprobar periódicamente de forma independiente del mismo modo que se revisan las cuentas o se controla la calidad de los productos y servicios. A otros interesados, como los miembros de la comunidad local en la que la empresa desarrolla su actividad y las organizaciones de voluntarios se les debe brindar la oportunidad de colaborar en estas tareas para garantizar su transparencia y credibilidad.

Apéndice 2: Ratificaciones del Convenio de la OCDE de Lucha Contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales

País	Ratificación/aceptación	Entrada en vigor	Legislación que permite su aplicación
Alemania	10 de noviembre de 1998	15 de febrero de 1999	15 de febrero de 1999
Argentina	8 de febrero 2001	9 de abril de 2001	10 de noviembre de 1999
Australia	18 de octubre de 1999	17 de diciembre de 1999	17 de diciembre de 1999
Austria	20 de mayo de 1999	19 de julio de 1999	1 de octubre de 1998
Bélgica	27 de julio de 1999	25 de septiembre de 1999	3 de abril de 1999
Brasil	24 de agosto de 2000	23 de octubre de 2000	11 de junio de 2002
Bulgaria	22 de diciembre de 1998	20 de febrero de 1999	29 de enero de 1999
Canadá	17 de diciembre de 1998	15 de febrero de 1999	14 de febrero de 1999
Chile	18 de abril de 2001	17 de junio de 2001	Octubre de 2002
Dinamarca	5 de septiembre de 2000	4 de noviembre de 2000	1 de mayo de 2000
Eslovenia	6 de septiembre de 2001	5 de noviembre de 2001	–
España	4 de enero de 2000	4 de marzo de 2000	2 de febrero de 2000
Estados Unidos	8 de diciembre de 1998	15 de febrero de 1999	10 de noviembre de 1998
Finlandia	10 de diciembre de 1998	15 de febrero de 1999	1 de enero de 1999
Francia	31 de julio de 2000	29 de septiembre de 2000	29 de septiembre de 2000
Grecia	5 de febrero de 1999	6 de abril de 1999	1 de diciembre de 1998
Hungría	4 de diciembre de 1998	15 de febrero de 1999	1 de marzo de 1999
Islandia	17 de agosto de 1998	15 de febrero de 1999	30 de diciembre de 1998
Irlanda	–	–	26 de noviembre de 2001
Italia	15 de diciembre de 2000	13 de febrero de 2001	26 de octubre de 2000
Japón	13 de octubre de 1998	15 de febrero de 1999	15 de febrero de 1999
Luxemburgo	21 de marzo de 2001	20 de mayo de 2001	11 de febrero de 2001
México	27 de mayo de 1999	26 de julio de 1999	18 de mayo de 1999
Nueva Zelanda	25 de junio de 2001	24 de agosto de 2001	3 de mayo de 2001
Noruega	18 de diciembre de 1998	16 de febrero de 1999	1 de enero de 1999
Países Bajos	12 de enero de 2001	13 de marzo de 2001	1 de febrero de 2001
Polonia	8 de septiembre de 2000	7 de noviembre de 2000	4 de febrero de 2001
Portugal	23 de noviembre de 2000	22 de enero de 2001	9 de junio de 2001
Reino Unido	14 de diciembre de 1998	15 de febrero de 1999	14 de febrero de 2002
Rep. Checa	21 de enero de 2000	21 de marzo de 2000	9 de junio de 1999
Rep. de Corea	4 de enero de 1999	5 de marzo de 1999	15 de febrero de 1999
Rep. Eslovaca	24 de septiembre de 1999	23 de noviembre de 1999	1 de noviembre de 1999
Suecia	8 de junio de 1999	7 de agosto de 1999	1 de julio de 1999
Suiza	31 de mayo de 2000	30 de julio de 2000	1 de mayo de 2000
Turquía	26 de julio de 2000	24 de septiembre de 2000	–

TEXTO DE CONTRAPORTADA

En todo el mundo hay empresas interesadas en explorar oportunidades de comercio o inversión en la Federación Rusa. En este documento, Amnistía Internacional explica con detalle las responsabilidades de dichas empresas respecto a las cuestiones de derechos humanos, señala los problemas con los que pueden encontrarse y llama la atención sobre la influencia que pueden ejercer promoviendo una buena práctica empresarial.

Amnistía Internacional pide a las empresas que desempeñan su actividad en la Federación Rusa (al igual que en todos los demás países) que garanticen que sus prácticas se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Esto significa que deben respetar los derechos humanos de sus empleados y de la población de las comunidades donde actúan. También deben hacer que el respeto de los derechos humanos sea una parte integrante de su trato con otras empresas, asociados, proveedores y autoridades gubernamentales.

Las empresas deben hacer que sus propias políticas y prácticas, incluidas la contratación y las políticas de empleo, estén exentas de toda discriminación por motivos de sexo o de origen étnico o racial. Las empresas no deben explotar el trabajo infantil ni el trabajo forzado. Deben investigar el historial de derechos humanos de las empresas de seguridad a las que proyecten recurrir y abstenerse de contratar a aquellas que tengan un historial de abusos contra los derechos humanos. Por encima de todo, las empresas deben tomar medidas para evitar toda complicidad en violaciones de derechos humanos.